

**JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA**

SENTENCIA DE TUTELA No. T-020

RAD.: No. T-001-2024-00021-00

Santiago de Cali, cinco (5) de febrero dos mil veinticuatro (2024)

I. OBJETO DE ESTE PRONUNCIAMIENTO

Procédase con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes, a proferir el fallo que corresponde dentro de la presente acción de tutela, instaurada por el señor **MARIO NAMUR LEDESMA ARAGÓN**, a través de su apoderado, contra **BANCOLOMBIA S.A.**, a través de su Representante Legal, o quien haga sus veces; por la presunta vulneración a su derecho de petición.

II. ANTECEDENTES

Procura el amparo del derecho que invoca, por cuanto, a la fecha de presentación de esta acción constitucional, la entidad accionada no le ha dado respuesta a la petición que impetró el **18/12/2023**.

Como sustento de hecho manifiesta que, radicó ante la entidad accionada vía correo electrónico el derecho de petición en mientes, para que se diera cumplimiento a sentencia dictada por el **Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali**, sobre las sumas de dinero a favor del accionante, sin que a la fecha, la entidad accionada se haya pronunciado.

Finalmente solicita se le amporen los derechos invocados y se le ordene a Bancolombia S.A. dar respuesta a la solicitud – derecho de petición – presentada.

III. ACTUACIÓN PROCESAL

Radicada la petición de amparo constitucional mediante **auto No. 0275 de 23/01/2024**, se procedió a su admisión; absteniéndose de vincular al presente trámite constitucional a otras entidades, toda vez que de la lectura del escrito de tutela y de la petición elevada ante la accionada, no se desprende que exista obligación alguna respecto de otra entidad, pues, la solicitud se elevó directamente al accionado; concediéndole el término de un día para que manifestara lo que a bien tuviera sobre los hechos y las pretensiones de la petición de amparo, solicitándose al **Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali** que remitiera

copia de la **sentencia de tutela No. 158 de 11/10/2023**, recibíéndose las respuestas que a continuación se sintetizan.

i) **Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali.** – Mediante escrito recibido el **24/01/2024**, anexando 1 archivo digital en PDF de 58 páginas, ubicado en el documento 05 del expediente electrónico de la presente tutela, la Juez aporta copia de la **Sentencia de Tutela No. 158 de 11 de octubre de 2023**, que cursó en ese Despacho bajo **radicado No. 7600113110003-2021-00395-00**.

IV. **CONSIDERACIONES**

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional, el artículo 37 del Decreto 2591, modificado por el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, el Decreto 1983 de 2017 y el Decreto 333 de 2021; es competente este Estrado Judicial para conocer, tramitar y decidir la presente petición de amparo constitucional. Así mismo, ha de tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 86 en mientes, **la promoción de la acción de tutela puede hacerla cualquier persona directamente, o por quien actúe en su nombre**, como es este el caso, y que la accionada es la entidad de quien se predica la vulneración del derecho.

La Carta Política de 1991 albergó en su articulado entre otros mecanismos que desarrollan el estado social de derecho, la acción de tutela, como la herramienta adecuada para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales “(...) cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (...)”¹, haciendo de ésta un **procedimiento preferente, sumario y subsidiario**.

En la acción constitucional que hoy ocupa la atención del Juzgado, el problema jurídico se concreta en determinar, si tras la negativa de la entidad accionada en dar respuesta a la petición impetrada por el tutelante a través de su apoderado, se le conculca el derecho invocado.

Para resolver el problema jurídico planteado, debemos tener en cuenta especialmente lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, Decreto 306 de 1992, el artículo 23 de la C.N., lo dispuesto en la Ley 1755 del 2015; así como también algunos de los precedentes jurisprudenciales que con relación al caso se han emitido.

Con relación al derecho de petición, está consagrado en el **artículo 23 de la Carta Magna**, regulado a través de la **Ley 1755 del 2015**, siendo de carácter constitucional y fundamental, cuyo propósito es obtener una pronta respuesta de la autoridad ante quien se presente la solicitud, configurándose en el principal derecho que tienen las personas para recibir la

¹ Artículo 86 Constitución Nacional

particularización de la voluntad de la administración pública, sin limitarse a la posibilidad de que los particulares expongan sus inquietudes ante la administración y de manera excepcional ante los particulares, recibiendo una simple información, sino que, además, las respuestas deben ser oportunas, claras y resolver de fondo la solicitud formulada. Así mismo, en atención a su carácter de derecho fundamental, puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción de tutela, cuya finalidad es que el particular obtenga un pronunciamiento frente a su solicitud, bien sea favorable o desfavorable a sus intereses.

En el artículo 32 *Ibidem*, se establece lo referente al derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas así:

“Artículo 32. *Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.*

*Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones **estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título.***

Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.

Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Hábeas Data.

PARÁGRAFO 1o. *Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.*

PARÁGRAFO 2o. *Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.*

PARÁGRAFO 3o. **Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes.** (Subrayado y cursiva del Despacho).

En reiterada jurisprudencia la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado acerca del derecho de petición y su carácter fundamental, de tal suerte que la respuesta debe **brindar una efectiva, adecuada y oportuna solución al asunto solicitado**, lo que no implica que

la decisión sea a favor de quien hace la solicitud, pero sí que se adopte una posición clara y precisa frente al asunto, debiendo reunir la respuesta tres exigencias básicas:

*“(…) 1) **Que sea adecuada**, es decir, que se ciña a los requisitos de correspondencia e integridad; 2) **Que sea efectiva**, es decir, que conduzca al peticionario a la solución de su problema; 3) **Que sea oportuna**, puesto que así se satisface el principio de efectividad de los derechos (…)”² (Subraya y negrita del Juzgado).*

Al respecto la Corte Constitucional reitera jurisprudencia mediante **sentencia T-315/18**, en la que indicó lo siguiente:

“NUCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICION-Elementos.

*El derecho de petición se integra por (i) la prerrogativa de formular o elevar la petición, por lo que las prácticas que impidan o restrinjan esta posibilidad resultan, en principio, afectaciones caracterizadas al derecho fundamental de petición; (ii) **el derecho a obtener una resolución o respuesta material, clara y congruente respecto de lo solicitado, independientemente del sentido de lo que se decida, lo que implica que vulnera este derecho fundamental las respuestas meramente formales, evasivas y, en general, que no resulten plenamente congruentes respecto de lo requerido;** (iii) el derecho a que la decisión de fondo respecto de la petición sea proferida y notificada dentro del término legalmente previsto dependiendo del tipo de petición, razón por la que la respuesta tardía contraría este derecho.” (Subraya y negrita del Despacho).*

Por otra parte, también se ha aclarado que el derecho de petición no solo comprende la etapa de recepción y trámite de la solicitud, sino que **también se ocupa de la respuesta, la cual debe ponerse en conocimiento del peticionario.**³ Es así como la Corte Constitucional ha fijado las reglas que deben tener en cuenta todos los funcionarios judiciales al aplicar esta garantía fundamental, las cuales tienen por núcleo esencial la resolución pronta y oportuna de la cuestión petitionada, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido, aclarando que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

CASO CONCRETO. – Establecer, si tras la negativa de la entidad accionada en dar respuesta a la petición que le fuera impetrada por el actor, se le conculca el derecho de petición invocado.

Cabe advertir que el accionado, **Bancolombia S.A.**, guardó silencio en el trámite de la presente acción constitucional, pese a estar notificado del mismo desde el **23/01/2023**, en la dirección de correo electrónico notificacijudicial@bancolombia.com.co, tal como consta en el documento 04 del expediente electrónico de esta acción constitucional, por lo

² Sentencia T-257 de 1994 MP. Carlos Gaviria D.

³ Sentencia T553 de 1994. MP.: José Gregorio Hernández Galindo.

que se da paso a la aplicación de lo dispuesto en el **artículo 20 del Decreto 2591 de 1991**, que establece la presunción de veracidad, sin que ello implique que el Despacho se abstenga de estudiar el caso a fin de determinar la conculcación o no del derecho invocado.

Ahora bien, se encuentra probado en el presente asunto que el tutelante, señor **Mario Namur Ledesma Aragón**, a través de su apoderado, presentó petición⁴ ante el accionado, **Bancolombia S.A.**, solicitando se dé cumplimiento a lo ordenado por el **Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali**, en su **Sentencia No. 158 de 11 de octubre de 2023**, proferida dentro del proceso de sucesión del causante **Rodolfo Ledesma Aragón** (q.e.p.d.), en el sentido de que le sean entregadas las sumas de dinero que se relacionan a continuación, mediante cheque con sello de páguese al primer beneficiario o mediante transferencia a su cuenta de ahorro de **Bancolombia No. 81023592118**

1. **50%** del **CDT 2129041** por la suma de **\$8.464.826,78** más los intereses devengados hasta la fecha de cobro.
2. **50%** de los intereses, al corte **27 junio de 2022**, producidos por el **DCT 2129041** por la suma de **\$3.939.822,11**.
3. Cualquier otra suma de dinero que el causante tenía en cualquier otro producto con este banco.

Corolario a lo anterior, se evidencia una flagrante vulneración al derecho de petición del accionante, señor **Mario Namur Ledesma Aragón**, dado que, a la fecha de emitir la presente decisión, pasados un (1) mes y diecisiete (17) días, no se le ha emitido una respuesta **adecuada y efectiva** frente a lo solicitado, como tampoco se pronunció el accionado frente al presente trámite constitucional, razón por la cual el Juzgado, dispondrá tutelar el derecho de petición invocado por el actor, ordenando al accionado, **Bancolombia S.A.**, que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo ha hecho, proceda a **emitir una respuesta adecuada y efectiva** frente a la petición que le impetrara el accionante, señor **Mario Namur Ledesma Aragón**, dirigiendo la misma a la dirección de correo electrónico angel.tamura@aselt.co, aportada por el tutelante para recibir notificaciones tanto en el escrito contentivo de la petición, como en el de tutela.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY;

⁴ Páginas 5 a 11 del documento 01 del expediente electrónico.

RESUELVE:

PRIMERO. – TUTÉLASE el derecho de petición invocado por el accionante, señor **MARIO NAMUR LEDESMA ARAGÓN**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. – ORDÉNASE en consecuencia de lo anterior, que el accionado, **BANCOLOMBIA S.A.**, a través de su Representante Legal, o quien haga sus veces; dentro de las **cuarenta y ocho (48) horas siguientes** a la notificación de la presente providencia, si aún no lo ha hecho, **EMITA UNA RESPUESTA ADECUADA EFECTIVA** frente a la petición que le fuera impetrada por el accionante, señor **MARIO NAMUR LEDESMA ARAGÓN**, el **18/12/2023**, a través de su apoderado, **Dr. ÁNGEL MARÍA TAMURA KIDOKORO**, remitiendo la misma a la dirección de correo electrónico **angel.tamura@aselt.co**, aportada por el tutelante para recibir notificaciones tanto en el escrito contentivo de la petición, como en el de tutela.

TERCERO. – REMÍTASE el presente expediente a la **HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL** para su eventual revisión, dentro del término consagrado en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, en caso de no ser impugnado este fallo.

CUARTO. – ORDÉNASE que de ser excluida de revisión la presente acción de tutela por la **HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL**, se proceda al **ARCHIVO** del expediente por parte de la **OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI**.

QUINTO. – NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes en la forma y términos previstos en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991; no obstante, ante la eventual imposibilidad de enterar a las partes o a terceros interesados de las resultas de este trámite, **SÚRTASE** dicha notificación por **AVISO** el que deberá fijarse en la Oficina de Apoyo – Secretaría y a través de publicación en la página web de los **JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS** de esta ciudad.

NOTIFÍQUESE. –


JORGE HERNÁN GIRÓN DÍAZ
JUEZ